



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2020-00227-000
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: HERIBERTO ÁNGEL LUQUETTA CASADIEGO
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP
ORDINARIO: 1100133335026-2015-00600-00

La parte ejecutante, a través de apoderado judicial, ha solicitado a este juzgado, que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre orden de pago a su favor y en contra del **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP**, con el fin de obtener el pago de las diferencias de las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 1° de enero de 1995, pero con efectos fiscales a partir del 5 de agosto de 2012, por prescripción trienal, por la suma total de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$15.391.650) m/cte.**

De la misma manera, solicita el pago de intereses moratorios de que trata el inciso 6 del artículo 192 del CPACA, sobre las diferencias pensionales no canceladas oportunamente y que deberán liquidarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia hasta el día en que se verifique el pago de la obligación.

También solicita el pago de las costas y agencias en derecho.

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no librar mandamiento de pago en el presente asunto. Para el efecto se analizará lo siguiente:

A. PRETENSIONES

La activa solicita se libre mandamiento ejecutivo de pago de la siguiente manera:

*“1. Que se libre mandamiento de pago en contra **UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PORTECCIÓN SOCIAL – UGPP** representada legalmente por su Directora General Doctora*

GLORIA INES CORTES ARANGO o quien haga sus veces o quien ésta designe, a favor del (la) señor (a) HERIBERTO ÁNGEL LUQUETTA CASADIEGO, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 12.578.138 de El Banco (Magdalena), por las siguientes sumas de dinero y por los valores relacionados a continuación:

- 1) Por la suma superior a QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$15.391.650) MCTE, por concepto de las diferencias pensionales liquidadas y no pagadas desde el 01 de enero de 1.995, pero con efectos fiscales a partir del 05 de Agosto (sic) de 2012 por prescripción trienal, hasta el 26 de febrero de 2019, que por motivo de un descuento unilateral por mayor valor por concepto de Aportes Pensionales realizado por la UGPP que ocasiona un saldo pendiente por cancelar por mesadas atrasadas totales resultantes de la reliquidación ordenada en las decisiones judiciales.*
- 2) Por el total de los intereses moratorios de que trata el inciso 6 del artículo 192 del C.P.A.C.A, que se sigan generando sobre las diferencias pensionales no canceladas oportunamente y que deberán liquidarse desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta el día en que se verifique el pago total de la obligación.*
- 3) Por las sumas que correspondan a costas y agencias en derecho a las que deberá condenarse a la UGPP dentro del este proceso ejecutivo.”*

De la misma manera, solicita a este Despacho Judicial la integración de un litisconsorte cuasi necesario, esto es, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo anterior, por cuanto según el apoderado judicial de la parte ejecutante, dicha entidad tiene un interés directo en las resultas del proceso, en cuanto a la obligación de pago de los aportes proporcionales al Régimen Pensional que le corresponde a la entidad nominadora sobre las diferencias resultantes de la reliquidación ordenada judicialmente.

B. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Destaca el abogado de la parte actora que, la liquidación de los aportes realizada por la UGPP, consignada en forma global dentro del acto administrativo de cumplimiento a un fallo judicial, no tienen soporte jurídico alguno que respalde la liquidación de aportes, razón por la cual, el mayor valor deducido se traduce en la tardanza en el pago de las diferencias de mesadas y en la causación de intereses en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2012.

Afirma que, la liquidación de aportes solo tiene respaldo legal desde el 13 de febrero de 1985 hasta la fecha de retiro del servicio oficial, en la proporción que corresponda al trabajador y de acuerdo con el porcentaje de aportes que le asignó la Ley durante cada uno de los periodos legales de la ley 33 de 1985 y la ley 100 de 1993.

Señala que, al no encontrarse ninguna justificación legal ni probatoria que sustente la liquidación y deducción de aportes efectuados por la UGPP, en las cuantías expresadas dentro del acto administrativo de cumplimiento, se concluye entonces, que tal decisión administrativa contiene un mayor valor deducido por aportes y la correspondiente falta de pago total de las

diferencias de mesadas generadas por el cumplimiento de un fallo judicial a favor del ejecutante.

Concluye que, las diferencias de mesadas aun no pagadas deberán seguir los lineamientos establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA, que ordenan pagar intereses con DTF durante los 10 meses siguientes a la ejecutoria y de mora de ahí en adelante.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso¹, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme a lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales, lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros a tener en cuenta en casos como el presente:

1. Solicitud: A través de memorial radicado por el abogado **LUIS ALFREDO ROJAS LEÓN** en representación del señor **HERIBERTO ÁNGEL LUQUETTA CASADIEGO**, solicitó al Juzgado que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la UGPP, con el fin de obtener el pago de las diferencias dejadas de cancelar desde el 1° de enero de 1995, pero con efectos fiscales, desde el 5 de agosto de 2012, ordenado en las sentencias proferidas en primera y segunda instancia.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

Al respecto, el inciso K del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

*k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, **de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia** y de laudos arbitrales contractuales estatales, **el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.** (...)”* Negrilla y subraya fuera de texto original

A su vez el artículo 192 del mismo ordenamiento dispuso en su inciso segundo:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.

(...)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá

presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (...)
Negrilla y subraya fuera de texto original

Así las cosas, en principio el ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva.

En el plenario se constata que el ejecutado es la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP**, como entidad pública receptora de las funciones y todas las actividades adelantadas en su momento por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

Del mismo modo, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 9 de marzo de 2020 (*fl.2º expediente digital y Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI – Expediente 2015-600*), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente demanda se encuentra presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue del **31 de octubre de 2017**.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

De la misma manera, se puede constatar, que la parte actora radicó solicitud de cumplimiento a un fallo judicial el **5 de julio de 2018**, tal y como se observa a folios 15 y 16 del expediente digital.

2. Título Ejecutivo: En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

Por un lado, se encuentra las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, los días 30 de marzo y 5 de octubre de 2017. (Fls.32 a 63 del expediente digital).

Seguidamente, debe tenerse como tal la Resolución RDP 033692 del 15 de agosto de 2018 y RDP 039628 del 1º de octubre de 2018, en virtud de la cual se dio cumplimiento al fallo antes aludido, aunque de manera parcial en consideración de la parte ejecutante (fls. 17 a 29 del expediente digital).

Conforme con lo anterior, el Despacho considera que las sentencias proferidas, conjuntamente con los actos de ejecución y la liquidación que efectuó la UGPP para el cumplimiento de las sentencias, configuran un título ejecutivo, por darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que la decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y del contenido de la misma se desprende la obligación hoy reclamada por la ejecutante, que corresponde

el pago de las diferencias dejadas de cancelar desde el **5 de agosto de 2012**, siendo una de las órdenes impartidas por este estrado judicial y que no fue cumplida de manera parcial por el ente administrativo ejecutado.

Así las cosas, es procedente el mandamiento de pago sujeto a las prescripciones contenidas en los artículos 424 y 430 del Código General del Proceso, respecto de la **diferencia en el monto** de los emolumentos que no fueron incluidos al momento de efectuar la liquidación, y ordenados en las sentencias aportadas como título ejecutivo, con su correspondiente indexación e intereses moratorios que devengaron.

Ahora bien, se tiene que el monto solicitado por el ejecutante asciende a la suma de **\$15.391.650²**, conforme la liquidación expuesta por el ejecutante, **sin que necesariamente esta suma sea el valor a cancelar**, toda vez que ello está sujeto a la determinación precisa de la solicitud de cumplimiento a la sentencia, las excepciones propuestas por la demandada y a la liquidación del crédito.

A su vez, se precisa que los valores ordenados se encuentran comprendidos desde el **5 de agosto de 2012**, en virtud de lo dispuesto en las sentencias proferidas por este Despacho Judicial y el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de marzo y 5 de octubre de 2017 correspondientemente, en un monto del 75% del salario promedio mensual devengado en el año anterior al retiro del servicio, con la inclusión de la **totalidad** de los factores que en dicha providencia se indicaron y bajo los parámetros que en la misma se establecieron.

Cabe resaltar, que la causación de intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el **31 de octubre de 2017**, hasta la solicitud de cumplimiento al fallo, **5 de julio de 2018**, cesó de conformidad con lo dispuesto en el art. 192 del CPACA, pues el ejecutante dejó pasar más de **8 meses** para solicitar el cumplimiento de los fallos. Razón por la cual el despacho librará mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios insolutos causados a partir del día siguiente hábil a la solicitud del cumplimiento del fallo, esto es, **6 de julio de 2018**.

Ahora bien, y respecto de la solicitud de integración del litisconsorte cuasi necesario, este Despacho Judicial manifiesta desde ya, que se **negará dicho pedimento**, habida consideración que, la parte ejecutante únicamente se limitó en realizar la petición, sin exponer de manera suficiente las razones por las cuales debería integrarse al proceso a la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunado a ello, no explicó si su no vinculación al presente proceso impediría resolver sobre todos los extremos de la Litis, máxime cuando estamos en un escenario de ejecución con una sentencia como título ejecutivo donde se establecen obligaciones claras, expresas y exigibles

² Folio 8

respecto de la hoy demandada y donde, evidentemente, no se encuentra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Corolario de lo anterior, observa el Despacho que, en el presente proceso se solicita la ejecución de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, habida consideración que, es esta la entidad quien está obligada a dar cabal cumplimiento al fallo judicial y no la Registraduría Nacional del Estado Civil, a su vez que, en el expediente de Nulidad y Restablecimiento del Derecho no se vinculó a la entidad nominadora y así se vio reflejado en los fallos objeto de ejecución.

Dicho esto, para este Despacho Judicial es posible dictar sentencia de fondo únicamente con la intervención de la entidad ejecutada, sin necesidad de vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues la obligación que tiene dicha entidad es con la Ugpp, al realizar el pago de los aportes y no directamente con el ejecutante.

En mérito de lo expuesto, en los términos del artículo 430 del Código General del Proceso, el Despacho dispondrá librar mandamiento ejecutivo a favor del señor **HERIBERTO ÁNGEL LUQUETTA CASADIEGO** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP** por la suma de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$15.391.650) m/cte.**

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva, a favor del señor **HERIBERTO ÁNGEL LUQUETTA CASADIEGO** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP** por la suma de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$15.391.650) m/cte.**, por concepto de las diferencias de las mesadas dejadas de cancelar desde el 5 de agosto de 2012.

SEGUNDO: Para los efectos del numeral 4° del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2° del decreto 2867 de 1989, se fija la suma de **SESENTA MIL PESOS (\$60.000,00) m/cte**, que deberá consignar la parte demandante en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, **en la CUENTA CORRIENTE ÚNICA NACIONAL No. 3-082-00-00636-6 del Banco Agrario “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS –CUN”.**

TERCERO: Notifíquese esta providencia personalmente a la entidad demandada, **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

CUARTO: Fíjese a la entidad demandada, el término de cinco (5) días para que cumpla con la obligación de efectuar el pago de los intereses moratorios, reconocidos en la sentencia que constituyen título ejecutivo en el presente proceso (Artículo 431 C.G.P.).

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la demandada podrá proponer excepciones de mérito, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 442 del C.G.P.

SEXTO: Notifíquese personalmente al señor representante del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los términos del artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

En el evento en que la agencia decida intervenir en el proceso, el mismo se suspenderá en los términos del artículo 611 del Código General del Proceso.

NOVENO: Se reconoce personería jurídica al abogado **LUIS ALFREDO ROJAS LEÓN**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.752.166 de Tunja y portador de la tarjeta profesional 54.264 del C. S. de la J., como apoderado principal del demandante, en los términos y para los fines del poder visible a folio 13 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

20

Firmado Por:
ANDRES JOSE



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **3 DE MARZO DE 2021**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA

QUINTERO

**GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
10b23aa5892d00c4c16432c6909543a6e2dfae0cd1efd0d657911e5df5eedcd4
Documento generado en 02/03/2021 12:21:31 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>